

JULIO 17 DE 1916

**12ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION ORDINARIA**

PRESIDENCIA DEL Dr. D. MARIANO DEMARIA (hijo)

DIPUTADOS PRESENTES: Acosta Juan P., Agote Luis, Aguirre Diógenes, Aguirre Rafael M., Aldao Ricardo, Alvear Marcelo T. de, Araya Perfecto, Arce José, Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barco Gerónimo del, Barrera Roberto, Bonastre Manuel, Bonifacio Benjamín, Bravo Mario, Cantilo José Luis, Carranza Wenceslao C., Carrasco Alejandro M., Colina Félix M. de la, Cordero Octavio, Cornet Pedro L., Correa Francisco E., Corvalán Santiago E., Costa Julio A., Cúneo Francisco, Demarchi Alfredo, Demaria (hijo) Mariano, Dickmann Enrique, Echagüe Alfredo, Escobar Adrián C., Frugoni Zabala Domingo, Gallo Vicente C., Garro Allende Juan E., Garzón Félix T., Giménez Angel M., Goyeneche Arturo, Hernández Diógenes, Iriondo Néstor de, Iturbe Miguel, Jaramillo José M., Jerez Ernesto, Jiménez Beltrán Dámaso, Lagos Lauro, Le Bretón Tomás A., Lencinas José Néstor, López Buchardo J. Cecilio, Marchini Emilio, Marcó Celestino L., Martínez Zuviña Gustavo, Massa Arturo H., Melo Carlos F., Melo Leopoldo, Mihura Emilio, Molina Víctor M., Morán Gregorio, Moreno Rodolfo (hijo), Nougues Ambrosio, Oyhanarte Horacio B., Padilla Miguel M., Pagés Pedro T., Paz Eduardo, Pereyra Iraola Leonardo, Pérez Virasoro Evaristo, Pinedo Federico, Pradere Carlos M., Puch Angel E., Redoni Agustín, Reibel Martín, Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Rojas Guillermo, Saguier Fernando, Salaberry Domingo E., Salvatierra Nicanor, Santamarina Antonio, Saravia David, Silvetti Luis F., Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Tomaso Antonio de, Uriburu Francisco M., Usandivaras Agustín, Valle Delfor del, Varela Horacio C., Vedia Mariano de, Veyga Tomás de, Vidart Roberto, Videla Horacio C., Zaccagnini Antonio, Zalazar José María. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Repetto Nicolás. CON AVISO: Anquín Ireneo de, Bunge Augusto, Castellanos Joaquín, González Eldidio, Justo Juan B., Lagos Ovidio A., Moreno J. Alejandro, Zavalía Guzmán Alberto, SIN AVISO: Arancibia Rodríguez Alberto, Atencio Juan V., Barceló Alberto, Berho Martín S., Camaño Melitón, Contte Adolfo, Cornejo Julio, Galíndez Francisco Ramón, Maidana Julián, Mercado Angel E., Montes José Antonio, Paiz Juan Cruz, Rúa Francisco A., Salas Oroño Nicasio, Sosa Leopoldo, Vaca Narvaja Jesús, Vergara Tomás A.,

## SUMARIO

- 1.—La honorable cámara organiza su mesa directiva.
- 2.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo abriendo un **crédito suplementario** al departamento de obras públicas por la suma de pesos 16.377.79 moneda nacional.
- 3.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo sobre modificación a la ley de **accidentes del trabajo**.
- 4.—Mensaje del poder ejecutivo comunicando el decreto de actos y festejos oficiales con motivo del **centenario**.
- 5.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo abriendo un **crédito suplementario** al departamento del interior por la suma de pesos 269.792.16 moneda nacional.
- 6.—Mensaje del poder ejecutivo pidiendo la aprobación del decreto por el que se acepta la **donación** de un terreno en el pueblo General Capdevila (Chaco).
- 7.—Mensaje del poder ejecutivo pidiendo la aprobación del decreto por el que se acepta la **donación** de un terreno en Corral de Lorca, (Mendoza), con destino a instalación de una oficina telegráfica.
- 8.—Mensaje del poder ejecutivo pidiendo la aprobación del decreto por el que se acepta la **donación** de un terreno en Cruz del Eje (Córdoba).
- 9.—Mensaje del poder ejecutivo pidiendo la aprobación del decreto por el que se acepta la **donación** de un terreno en Villa Angela (Chaco).
- 10.—Mensaje del poder ejecutivo remitiendo los siguientes proyectos de ley: **presupuesto** general de gastos y recursos para 1917; modificación a la **tarifa** de las naftas y petróleos; **importaciones** particulares; **importaciones** libres; **derecho** adicional; **impuesto** a los alcoholes para perfumes; **sobretasa** al alcohol contenido en el vermouth importado; **impuesto** a la **cerveza**; **impuesto** al vino; **impuesto** al azúcar; **supresión** del descuento de 1 por ciento por pagos al contado en **impuestos** internos; modificaciones al código rural (exenciones del pago de **contribución directa**); aumento a las **patentes** de negocios que expendan bebidas alcohólicas; aumento a las **patentes** por expendio de tabacos como anexo a

otros negocios; impuesto a las ventas o trasmisiones de casas de negocio; impuesto a las órdenes de pago telegráficas; modificaciones a la ley de sellos; modificaciones a la ley 8890 (impuesto a la herencia); faros y balizas; modificación de las bases del almacenaje y eslingaje; venta de terrenos en el puerto de La Plata; corrección de un error en la sanción de un impuesto a los cigarrillos.

- 11.—Mensaje del poder ejecutivo reiterando el proyecto de ley aprobatorio del trazado de la línea fronteriza entre Salta y Formosa, remitido el 30 de junio de 1911 y reiterado el 13 de julio de 1914.
- 12.—Constitución e integración de comisiones.
- 13.—Despacho de las comisiones.
- 14.—Peticiones particulares.
- 15.—Congratulaciones.—Homenaje.
- 16.—Proyecto de ley, del señor diputado Angel M. Giménez sobre trabajo nocturno y sobre régimen de las sociedades de socorros mutuos.
- 17.—Proyecto de ley de los señores diputados José Arce y otros acordando pensión a la viuda del ex diputado doctor Miguel B. Pastor.
- 18.—Proyecto de ley del señor diputado Víctor M. Molina sobre reforma a la ley orgánica municipal de la Capital.
- 19.—Proyecto de ley del señor diputado Emilio Marchini sobre funcionamiento del colegio nacional de Gualaguaychú.
- 20.—Proyecto de ley del señor diputado Domingo Frugoni Zabala sobre validez de diplomas de universidades provinciales.
- 21.—Proyecto de ley del señor diputado Rodolfo Moreno (hijo) sobre modificaciones al código penal.
- 22.—Proyecto de ley de los señores diputados Antonio de Tomaso y otros sobre régimen de sociedades y empresas extranjeras.
- 23.—Proyecto de ley de los señores diputados Antonio Zaccagnini y otros sobre impuesto territorial a propietarios ausentes.
- 24.—Proyecto de ley de los señores diputados Augusto Bunge y otros sobre alojamiento higiénico de asalariados.
- 25.—Proyecto de ley de los señores diputados Angel M. Giménez y otros sobre órdenes religiosas.
- 26.—Proyecto de ley de los señores diputados Enrique Dickmann y otros sobre impuesto a las sociedades anónimas.
- 27.—Proyecto de ley de los señores diputados Juan B. Justo y otros sobre creación de escuelas primarias.
- 28.—Proyecto de ley del señor diputado N. A. Avellaneda sobre estadística judicial.

- 29.—Solicitud de licencia del señor diputado Leopoldo Sosa.
- 30.—Proyecto de ley del señor diputado Marco Aurelio Avellaneda prohibiendo en los contratos comerciales la exclusión de personas de nacionalidades determinadas.
- 31.—Proyecto de ley del señor diputado Gerónimo del Barco reglamentando y prohibiendo la exportación de ganado en pie y la matanza de vacas.
- 32.—Proyecto de ley de los señores diputados Carlos F. Melo, Francisco Aníbal Riú y Benjamín Bonifacio sobre pavimentación de la Capital.
- 33.—Proyecto de ley del señor diputado Carlos F. Melo sobre formación del censo de bienes nacionales.
- 34.—Proyecto de ley del señor diputado Alfredo Demarchi reglamentando la construcción de obras públicas nacionales.
- 35.—Proyecto de ley del señor diputado José María Zalazar reformando la ley 8871 (ley electoral).
- 36.—Proyecto de ley del señor diputado David Saravia sobre casa de aislamiento en Salta.
- 37.—Proyecto de ley de los señores diputados Víctor M. Molina y otros modificando la ley 4235 (pensión a bomberos y agentes).
- 38.—Proyecto de ley de los señores diputados Arturo Goyeneche y Pedro Solanet sobre amnistía.
- 39.—Invitaciones.
- 40.—Mociones.

En Buenos Aires, a 17 de julio de 1916, siendo las 3 y 40 p. m., presentes en el recinto 63 señores diputados, se abre la sesión.

1

## MESA DE LA HONORABLE CAMARA

**Sr. Secretario** (González Bonorino). Señores diputados: disponiendo el artículo 34 del reglamento que el señor presidente y vices de la honorable cámara, terminen su mandato el 15 de julio, procede la elección de los que han de reemplazarlos.

Si no hay inconveniente, se tomará la votación nominal de práctica, para designar presidente de la honorable cámara.

—Votan para presidente por el señor diputado doctor Mariano Demaría (hijo), los señores diputados: Saravia, Agote, Aguirre (R. M.), Echagüe, Vedia, Arce, López Buchardo, Padilla, Costa, Barrera, Varela, Pinedo,

concilian con el artículo 5.º y también con el artículo 14, entonces venimos a establecer que el congreso puede dictar planes generales de instrucción, porque el congreso puede fundar, proteger y auxiliar establecimientos de instrucción que otorguen todos los grados de la enseñanza pública.

“*Concurren*, pues, y pueden concurrir en este caso la acción de los municipios, de las provincias y de la nación, la acción libre de la sociedad y la acción del estado.

No hay en la constitución cláusula alguna por la cual se prohíba ni a las provincias, ni a la nación, ejercer simultáneamente su acción en beneficio de la enseñanza pública, ni que vede a algunos de estos centros de poder intervenir en la materia; ni hay razón alguna imaginable por la cual se pueda suponer que la acción concurrente de las provincias y de la nación sea repugnante. Al contrario, el gran interés de este país es la cultura, y desde que puede ser fomentada más eficazmente por el doble concurso de la acción y de los esfuerzos de la nación y de las provincias, todos ellos pueden contribuir a levantar su nivel.

“Esta necesidad es cada día más premiosa. La mayor parte de los jóvenes nacidos en el interior de la república, que aspiran a tener una educación científica, afluyen a Buenos Aires. La capital los seduce y priva de volver a sus provincias una vez que su carrera termina; y en gran parte de esos centros, no obstante que una masa crecida de sus hijos ha recibido una educación superior, se carece hasta de personal necesario para la composición de los poderes públicos que deben ser formados con hombres de alguna competencia científica. Esto, que es adverso a la cultura del país, que es contrario a los principios federativos de gobierno, de desaparecer de la República Argentina, si ella quiere hacer una verdad de sus instituciones; si no basta la acción de las provincias para conseguirlo, que actúe la acción de la nación. De todas maneras, el mal es gravísimo, y es menester extirparlo. Los pueblos que no tienen suficiente coraje para darse cuenta de sus propios errores y enfer-

medades, no pueden ser cultos, ni pueden ser libres.”

Concluye Estrada su obra con este párrafo:

“Respecto de los colegios y facultades, los errores constitucionales y legislativos son más crasos. La libertad, en la esfera de la enseñanza superior, no ha encontrado hasta hoy ni aún un elemento rudimentario que la apoye y la desenvuelva. Entre tanto, es necesario decidirse por uno de los extremos de esta alternativa: si ha de prevalecer en la República Argentina la política absorbente y centralista de los antiguos, o la política que asegura a las sociedades un régimen de libertad, es decir, condiciones de desarrollo natural y actividad.”

De todo lo expuesto y lo transcrito surge lógica y naturalmente esta conclusión: Si la soberanía ordinaria reside en los estados federales, y la excepcionalmente por ellos *delegada* (como dice el recordado artículo 104 de la constitución) en el gobierno federal, el gobierno *delegatario* no puede desconocer en la entidad delegante las facultades que se ha reservado, porque equivaldría a que el hijo se tragara al padre.

Si las provincias se han reservado el derecho de crear y costear universidades, u otros institutos docentes superiores, adoptando los planes que dicte la autoridad nacional competente, es un contrasentido que el gobierno *delegado* por ellas para ciertos asuntos especiales de interés general, no reconozca los títulos y diplomas expedidos por aquellas universidades e institutos.

Entre otros términos: si los estados soberanos que han delegado parte de su soberanía, se ven desconocidos por el delegatorio aún en aquella parte de la soberanía que se han reservado, queda invertido el orden natural de las cosas, y consumada una verdadera subversión de las instituciones.

Sube de punto la anormalidad de esta situación, si se tienen presentes las siguientes disposiciones del tratado de Montevideo de 1889, redactado en el congreso sudamericano de derecho internacional privado, y convertido en ley de la nación:

“Artículo 10.—Los nacionales o ex-

“ tranjeros, que en cualquiera de los  
 “ estados signatarios de este tratado  
 “ hubiesen obtenido título o diploma,  
 “ expedido por la autoridad nacional  
 “ competente, para ejercer profesiones  
 “ liberales o científicas, se tendrán por  
 “ habilitados para ejercerlas en los  
 “ otros estados.”

“ Art. 2o. — Los grados académicos  
 “ conferidos por cualquiera de las uni-  
 “ versidades nacionales de los estados,  
 “ tendrán en las universidades de los  
 “ demás el mismo valor, que si hubie-  
 “ sen sido conferidos por sus propias  
 “ universidades.”

Como se ve, los autónomos estados federales argentinos, que constituyen la república, son tratados por su gobierno *delegado* peor que los estados extranjeros, lo que, a mi ver, es un colmo.

Hay una confusión lamentable en nuestra terminología habitual, cuando damos a la palabra *nacional* un significado equivalente a *federal* o perteneciente exclusivamente al gobierno nacional, en contraposición a lo que es provincial, como si no fuera nacional, sino extranjero, todo lo que es de las provincias. Es necesario defendernos de esta confusión de ideas.

Todas nuestras universidades, costeadas por la nación, fueron provinciales; pero actualmente existen sólo dos universidades provinciales, o sean las de Santa Fe y Tucumán, que se ven obstaculizadas en su desarrollo por leyes y precedentes judiciales adversos, y por la creencia general de cierta *capitis diminutio*, de que son víctimas.

De acuerdo con las ideas de Estrada y González, y con la necesidad sentida de difundir y descentralizar la cultura e ilustración públicas, corresponde hacer de una vez justicia a los estados argentinos, reconociéndoles plenamente sus derechos en esta materia, hoy oscurecidos y desconocidos.

El gobierno de la Confederación estuvo a la altura de las instituciones, cuando sancionó la ley 187 de 7 de septiembre de 1858, estableciendo la reciprocidad entre todas las universidades argentinas entre sí, y con las extranjeras.

El móvil político que dió ocasión a la ley, o sea el entredicho entre la universidad de Córdoba, entonces provin-

cial, y la de Buenos Aires, durante la separación de la provincia homónima, no atenúa su alcance principista, perfectamente concorde con la constitución nacional.

—Pasa el proyecto a la comisión de legislación.

21.

## CODIGO PENAL

### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1º. — Desde el 1º de enero de 1917 regirá, como ley de la nación, el proyecto de código penal presentado al poder ejecutivo por los doctores Diego Saavedra, Francisco J. Beazley, Rodolfo Rivarola, Cornelio Moyano Gacitúa, Norberto Piñero y José María Ramos Mejía, con las modificaciones contenidas en los artículos siguientes:

Art. 2º. — En el artículo 1º, en lugar de «y faltas cometidas», la palabra «cometidos».

Art. 3º. — En el artículo 4º, suprímese la palabra «muerte».

Art. 4º. — Suprímense los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10.

Art. 5º. — Agrégase al inciso 4º del artículo 26: «si el penado tuviera esposa o hijos menores de cualquier clase, corresponderá a éstos la mitad de la jubilación, pensión o goce de montepío».

Art. 6º. — Suprímense las palabras «de muerte o» en el artículo 47.

Art. 7º. — Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente: «Si la pena que correspondiese al autor fuese la de presidio por tiempo indeterminado, sufrirá el cómplice la de presidio temporal que no bajará de quince años; y si le correspondiese prisión por tiempo indeterminado, se le aplicará prisión que no baje de diez años».

Art. 8º. — En el artículo 66, inciso 1º, suprímense las palabras «muerte o».

Art. 9º. — En el artículo 69, inciso 1º, suprímense las palabras «muerte o».

Art. 10. — En el artículo 83, sustitúyese la palabra «diez» por la palabra «ocho».

Art. 11. — Suprímense las palabras «o muerte» en el artículo 84.

Art. 12. — Sustitúyense en el artículo 107 las palabras «seis meses a dos años» por «uno a tres años».

Art. 13. — Sustitúyense en el artículo 108 las palabras «otra clase de» por la palabra «toda».

Art. 14. — Agrégase al artículo 143 las palabras «con el propósito de causar perjuicio».

Art. 15. — Sustitúyese en el inciso 4º del artículo 203 la palabra «diez» por la palabra «ocho».

Art. 16. — Sustitúyense:

- a) En el artículo 121, las palabras «tres a diez» por «seis a quince»;
- b) En el artículo 122, las palabras «uno a cuatro» por «tres a seis»;
- c) En el artículo 123, las palabras «dos a seis» por «tres a seis»;
- d) En el artículo 124, las palabras «tres a quince» por «ocho a veinte»; y
- e) En el artículo 125, la palabra «tres» por la palabra «seis».

Art. 17. — Reemplázase el artículo 127 por el siguiente: «El que para satisfacer deseos propios o ajenos promoviére o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexos, será castigado:

- 1º. Con prisión de cuatro a quince años si la víctima fuera menor de doce años;
- 2º. Con prisión de tres a diez años si la víctima fuera mayor de doce años y menor de diez y ocho;
- 3º. Con prisión de uno a seis años si la víctima fuera mayor de diez y ocho años y menor de veinte y dos.

Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de diez a quince años cuando mediare violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda».

Art. 18. — Reemplázase el artículo 128 por el siguiente: «Será reprimido con prisión de cuatro a diez años, el que para satisfacer deseos ajenos promoviére o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad mediando violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción. Si mediare fraude o engaño, la pena será de uno a tres años de prisión».

Art. 19. — Agrégase a continuación del artículo 129, el siguiente: «La persona o personas regentes de casas de prostitución pública o clandestina, que admitieren menores de edad para el ejercicio de la prostitución, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión si fueren mayores de diez y ocho años. Si fueren menores de diez y ocho años, serán reprimidos con dos a diez años de prisión».

Si mediase alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 127, la pena podrá extenderse hasta quince años.

Art. 20. — Suprímese el artículo 131.

Art. 21. — Sustitúyense en el artículo 132 las palabras «un mes a un año» por «uno a tres años».

Art. 22. — Agrégase a continuación del artículo 132: «Los reincidentes en los delitos de corrupción de personas, serán deportados».

Art. 23. — Al final del título VIII, libro segundo, agrégase el siguiente capítulo:

## CAPITULO IV

### *Apología del crimen*

Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que hiciere públicamente y por cualquier medio, la apología de un hecho o del autor de un hecho que la ley castiga como delito.

Art. 24. — Agrégase a continuación del artículo 230, el siguiente:

«Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

- 1º. El que fabrique, venda, transporte o conserve explosivos susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad;
- 2º. El que propague por cualquier medio los procedimientos para causar incendios o estragos y para fabricar los materiales destinados a producirlos;
- 3º. El que propague los medios de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos.

Art. 25. — Agrégase a continuación del artículo 249 el siguiente capítulo:

## CAPITULO II bis

### *Delitos contra el sentimiento nacional*

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que realice actos ofensivos contra la bandera o el escudo de la nación.

Art. 26. — Agrégase a continuación del artículo 320, el siguiente capítulo:

## CAPITULO VI

### *Del pago con cheques sin provisión de fondos*

Será reprimido con prisión de uno seis meses, el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurren las circunstancias del artículo 187, un cheque o giro sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare el mismo dentro de las 24 horas de haber sido protestado.

Art. 27. — Agrégase al artículo 191, el siguiente inciso:

- 4º. El acreedor que a sabiendas, exija o acepte de su deudor a título de documento de crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior.

Art. 28. — Suprímese el Libro III del proyecto de 1906 que trata «De las faltas».

Art. 29. — Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás que se opusieren a la presente.

Art. 30. — Comuníquese al poder ejecutivo.

*Rodolfo Moreno (hijo).*

**Sr. Moreno (R.).** — Señor presidente:

*Fundamentos de la reforma.* — Nuestra legislación penal es diversa, desordenada y contradictoria. Existen, un código, una ley de reformas, una ley federal que castiga ciertos delitos contra la nación, una serie de leyes que modifican parcialmente al código como son la de seguridad social, la que reprime ciertas formas de corrupción y la que castiga los cheques dolosos, más otro conjunto de leyes que rigiendo materias diversas como ser marcas, correos, telégrafos, elecciones, contienen disposiciones de carácter represivo que necesitan ser aplicadas por los jueces del fuero criminal o correccional.

Esta serie de disposiciones que deben encontrarse reunidas en un código por disposición expresa del inciso 11 del artículo 67 de la constitución, dan lugar a incertidumbres e inseguridades que sólo podrían desaparecer con la sanción del código ordenado por la ley fundamental.

Hay un código, podría decirse lo que sería exacto nada más que en el nombre, pues ese código derogado en parte, modificado en otras e incompleto siempre, no rige sino algunas de las materias que comprende la legislación represiva.

Pero no solamente el desorden impone la necesidad del cuerpo organizado. El código y las leyes vigentes contienen preceptos contradictorios, repeticiones innecesarias, omisiones increíbles, excesos en unos casos y defectos en otros, ofreciendo más que un conjunto, un amontonamiento de disposiciones que no llenan las necesidades del país ni las imposiciones de su cultura.

Esfuerzos frecuentes y continuados se han hecho en el sentido de la reforma que es al propio tiempo unificación, pero todos ellos se han estrellado, tanto los científicos como los oficiales en la incuria legislativa que no ha afrontado la resolución de problema tan importante.

Planteo de nuevo esta cuestión que considero vital recogiendo una bandera que no es propia, pero a cuyo sostenimiento he contribuido en la cátedra, en el libro y en la propaganda.

*Antecedentes inmediatos.* — La pri-

mera ley penal de carácter genérico sancionada después de la organización nacional, fué la número 49 de 25 de agosto de 1863 limitada a los crímenes cuyo juzgamiento compete a los tribunales nacionales y estableciendo la penalidad de los mismos.

Se ocupa en once títulos: de la traición, de los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, de la piratería, de los delitos contra la seguridad interior de la nación, de la rebelión, de la sedición, de los desacatos contra la autoridad y otros desórdenes públicos, de la resistencia a la autoridad y soltura de los presos, de la interceptación y substracción de la correspondencia pública, de la substracción o destrucción de documentos depositados en las oficinas públicas, de las falsedades y del cohecho y otros delitos cometidos por empleados o contra el tesoro nacional.

Muchos de sus preceptos se encuentran actualmente modificados por leyes posteriores pero una gran parte de los mismos se aplican en los tribunales federales que han debido estudiar muchas veces el alcance de esa ley especial frente al código de la materia, que trata algunos asuntos considerados también por aquella ley.

La ley de 1863 sólo se refería, como código especial a una clase de crímenes, de manera que en cumplimiento de la cláusula constitucional recordada, se hacía necesario dictar el código que llamaríamos general.

Pensándose que era mejor que el poder ejecutivo preparase el proyecto y lo enviara a las cámaras, se dictó la ley de 6 de junio de 1863, por la cual se le autorizó para nombrar las comisiones encargadas de preparar los códigos. Y fué en cumplimiento de esa ley que se nombró al doctor Carlos Tejedor para que proyectara un código penal.

Este distinguido juriconsulto cumplió el encargo y presentó su trabajo en dos partes, la primera a fines de 1865 y la segunda en 1867. En él se ocupaba de los delitos ordinarios dejando en vigor la ley de 1863, de manera que no resolvía la unidad de la ley penal impuesta por el orden y exigida por la constitución, que no quiere códigos, sino "código" en cada materia.

El proyecto no se estudió por el congreso, porque la ley de 11 de setiembre de 1868, autorizó al poder ejecutivo para nombrar una comisión de tres abogados que se ocupara de examinar prolijamente el proyecto.

La comisión se nombró por decreto de 7 de noviembre de 1868 y después de diversas renovaciones se expidió presentando otro proyecto con fecha 3 de enero de 1881. Ese trabajo, que como lo ha observado el doctor Rivarola, tuvo poca influencia en nuestra legislación represiva, se encuentra suscripto por los doctores Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García y fué acompañado por una extensa exposición de motivos.

*Proyecto definitivo.* — La cámara de diputados para su proyecto definitivo partió del que presentara el doctor Tejedor, modificándolo de tal manera que podía considerarse como un trabajo nuevo.

La sanción se produjo por ley de 7 de diciembre de 1886 (número 1920) que sancionó según sus términos el proyecto del doctor Carlos Tejedor con las modificaciones introducidas por la comisión de códigos de la honorable cámara de diputados, para que empezara a regir desde el 1.º de marzo de 1887.

El código insistió en el error originario, pues no legisló sobre los delitos de orden federal, y desde entonces hasta hoy hemos contado con dos cuerpos de leyes penales, el federal y el ordinario, sin olvidar el conjunto de leyes complementarias, supletorias y reformatorias a que antes me he referido.

El juicio de esa ley se hizo en forma clara, precisa y concluyente en la obra del doctor Rodolfo Rivarola: "Exposición y crítica del código penal", que ha sido uno de los libros de materia jurídica que más ha influido sobre los estudiosos del país.

El mismo doctor Rivarola en su obra posterior "Derecho penal argentino", concreta en una página el juicio que merecía esa ley, observando:

"1.º. Que este código penal no ha realizado el precepto de la constitución, de ser un código nacional: fué concebido con el vicio originario del proyecto de Tejedor y hecho como un código para ser aplicado en la jurisdicción ordi-

naria de la capital y en las jurisdicciones provinciales. Ha dejado así subsistente otra legislación penal, flotante de origen constitucional, pero ocasionada a dudas y chocantes contradicciones si procede del congreso. Lo que ha pasado a este respecto con el código penal, no ha pasado ciertamente, con los otros códigos que el congreso ha sancionado. El código civil, el de comercio, el de minería, han abarcado el conjunto de leyes que por la naturaleza del asunto debían comprenderse en un sólo cuerpo, sin distinción de las jurisdicciones que debían aplicarlos, sin hacer un código para los tribunales ordinarios y otro para los tribunales federales; 2.º. La ausencia de concepción metódica en la distribución de sus partes, y de corrección en sus detalles; 3.º. El mantenimiento de un sistema penal, de imposible cumplimiento, en la parte de las penas privativas de la libertad; 4.º. El atraso respecto de instituciones nuevas, ya ensayadas, en otras partes, y que podrían experimentarse en nuestro país, como las leyes sobre reincidencia, libertad condicional, condena condicional, etcétera; 5.º. El silencio del código respecto de muchos hechos que deben pasar a la categoría de delitos, y que no tienen esta declaración ni sanción alguna en otras leyes; 6.º. El silencio respecto de cuestiones de tanto interés jurídico como los de la fuerza obligatoria de la ley penal con relación al territorio y tantos otros". (Derecho penal argentino — Página 19).

*Proyecto de 1891.* — Estas observaciones, unidas a los resultados de la aplicación, movieron al poder ejecutivo a encargar la reforma penal, dictándose con fecha 7 de junio de 1890 un decreto por el cual se encargó a los doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Matienzo la preparación de las reformas que reputen necesario introducir en el código penal, teniendo presentes los considerandos del decreto de nombramiento. En ese decreto se hacía notar: 1.º. que el estudio y la jurisprudencia de los tribunales habían comprobado que el código vigente adolecía de defectos que era necesario hacer desaparecer por los peligros que entrañaban para la sociedad y para los que sufren su aplicación; 2.º. que diversos paí-

ses han alterado su legislación penal haciendo estudios que deben tenerse en cuenta; 3.º que se han lanzado nuevas doctrinas en el campo de la ciencia, que aún cuando discutidas hay que examinarlas; y 4.º que el código tiene vacíos que deben llenarse para no dejar impunes hechos criminosos.

La comisión nombrada presentó su trabajo en junio de 1891, acompañando un proyecto de código completo y una exposición de motivos que constituye todo un libro de 242 páginas en la edición oficial.

El proyecto fué pasado al congreso y fué ampliamente estudiado en 1895. pero a pesar de haberse incluido ese año como asunto de prórroga, no llegó a discutirse.

*La ley de reformas.* — En marzo de 1900, la comisión de códigos de la cámara de diputados, sin consultar a los autores del proyecto, según lo manifiesta el doctor Rivarola, presentó un nuevo proyecto reducido a unas cuantas reformas sobre el código vigente.

Ese proyecto consta de 105 artículos tomados del que presentara la comisión nombrada en 1890 y de dos artículos originales que se refieren: a la prohibición de redimir penas corporales por dinero, y a establecer que los delitos definidos en el código cuyo conocimiento compete a la justicia ordinaria local, pero que por excepción corresponden al fuero federal deberán ser castigados con arreglo al código.

Algunos de los artículos tomados del proyecto de 1891 para el nuevo o sea el de reformas, fueron objeto de modificaciones insignificantes.

La ley se sancionó, tiene el número 4189 y se conoce con el nombre de ley de reformas.

Verifiqué el juicio de la misma, en un libro: "La ley penal argentina", que contiene mis opiniones personales. Repetirlo aquí sería además de inútil dar exagerada extensión a estos fundamentos.

Me limitaré por eso a expresar que la ley de reformas no ha resuelto el problema penal, el que se encuentra hoy en condiciones más desfavorables que las que tuvo antes de la ley número 4189.

No se ha obtenido desde luego la unidad perseguida, porque se encuentran

en vigencia: la ley de 1863, el código y la ley de reformas, con el agregado de que esta última al disponer que los jueces federales deben aplicar aquél, ha dado lugar a nuevas confusiones.

El proyecto del doctor Tejedor obedecía a un plan y a un criterio y tenía además un modelo. El proyecto de los doctores Piñero, Rivarola y Matienzo, tenía también su plan y su criterio que eran diferentes del que informaron el proyecto Tejedor y al código vigente.

De manera que intercalar en un código que obedecía a un criterio preceptos de otro código que respondía a otras ideas, era asegurar las discordancias.

De aquí el fracaso de la ley de reformas intensamente sentido y manifestado.

*El proyecto de 1906.* — El día mismo que se puso en vigencia la ley número 4189 se planteó la necesidad de unificar la ley penal y hacer cesar las incongruencias que contiene.

El poder ejecutivo por decreto de 19 de diciembre de 1904, penetrado de esas ideas, designó una comisión para que preparase varias leyes y entre ellas un código penal, expresándose así en el punto A. del artículo 1.º y haciéndose notar en los considerandos.

La comisión nombrada se componía de los doctores: Francisco Beazley, Rodolfo Rivarola, Diego Saavedra, Cornelio Moyano Gacitúa, Norberto Piñero y José María Ramos Mejía y cumplió su mandato en cuanto se refiere al código penal, presentando su proyecto con fecha 10 de marzo de 1906.

Han pasado diez años y el asunto se encuentra como el primer día, con la agravante de las leyes parciales que han tendido a la mayor confusión.

La honorable cámara de senadores a cuyo estudio se pasó el proyecto, no lo ha despachado, habiendo sido examinado según mis informes por la comisión de legislación, sin llegar al dictamen definitivo.

Y como, de acuerdo con preceptos reglamentarios, ha caducado tal proyecto, es necesario retornar la iniciativa a los efectos de la sanción de una ley reclamada por intereses permanentes y fundamentales.

*Juicios sobre el proyecto.* — El proyecto de 1906, estudiado y elogiado



por eminencias de la ciencia penal tiene características e innovaciones que se encuentran perfectamente concretadas en la nota con la cual la comisión autora, lo elevó al poder ejecutivo.

Desde luego unifica las leyes penales en un sólo cuerpo y cumple con el precepto fundamental que dispone un código. Es cierto que después de su presentación se han sancionado diferentes leyes que completan o modifican el código vigente y que no pudieron ser apreciadas por los autores del proyecto. Pero ese inconveniente, se subsanaría en el caso de sanción incorporando al código de 1906 los preceptos de esas leyes que encierran previsiones nuevas para no dejar vacíos en la legislación existente.

El proyecto en cuestión es más completo que el código actual aún con las leyes que lo modifican y tiene un método muy superior, pues el código vigente aparte de las deficiencias originarias, sufre la agravación de las desordenadas disposiciones posteriores. Contiene un título sobre aplicación de la ley penal con relación al territorio que llena un vacío; divide las penas de encierro en forma más acertada y más acorde con la práctica; desvanece dudas con la regla relativa a la aplicación de la ley con relación al tiempo conteniendo una regla muy sensata; es más claro que el código actual cuando señala el producto del trabajo de los condenados; establece la curatela de los penados y de los insanos resolviendo puntos discutidos; consagra la libertad condicional en lugar de la gracia; crea la libertad condicional; es acertado en lo relativo a cómputos y a las reglas relacionadas con la pena de multa; define lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios; es mucho más completo y eficaz en materia de responsabilidad; tiene un título sobre extinción de acciones y de penas en lugar de un título sobre prescripción, que es sólo una de las formas de extinguir acciones y penas; y contiene otro título sobre ejercicio de acciones que suple una deficiencia.

En materia de eximentes, agravantes y atenuantes el criterio es el más moderno y científico, habiendo dedicado un capítulo especial a reincidencia, re-

dactado en forma que no permite las discusiones y las dudas del presente.

Los preceptos sobre tentativa están mejor y contienen una regla muy práctica al disponer que se tendrán en cuenta los antecedentes del sujeto.

En materia de complicidad, se acepta la teoría de la ley núm. 4189, distinta de la contenida en el código penal, y que fué tomada por aquella ley del proyecto de 1891. Me refiero a la pena que según el código Tejedor era inferior para el cómplice con relación al autor y que en el proyecto de 1891 y en la ley núm. 4189 se nivelan aún cuando se dice que al cómplice no se le podrá aplicar el máximun.

He sostenido que ese criterio no era justo, pero teniendo en cuenta el conjunto del proyecto de 1906, no tengo inconveniente en aceptarlo. El proyecto, en efecto, trae, de acuerdo con las teorías y prácticas más adelantadas, penas con grandes márgenes para su aplicación. Al criterio antiguo del castigo fijo para el delito determinado, lo sustituye, con la pena de límites amplios, para que el juez la aplique desde el *mínimum* hasta el *máximun* teniendo en cuenta al sujeto y al grado de peligro que puede representar para la sociedad.

En consecuencia no puedo tener óbice para la equiparación de que los magistrados apreciarán en uno y otro caso la pena que corresponda de acuerdo con las condiciones del autor, cuya *temibilidad* debe considerarse como lo dicen los autores positivistas.

El proyecto, volviendo sobre un error del código, no trae un capítulo especial para la culpa o imprudencia, sino que coloca en los capítulos de la parte especial que corresponden a delitos en los cuales puede intervenir ese factor, el precepto que lo prevé. Era en efecto, desacertado ocuparse de la culpa o imprudencia en la parte general, desde que no todos los delitos pueden cometerse de esa manera; los hay que sólo se pueden realizar con dolo.

Se ha suprimido también el título de los *encubridores* y legislado sobre encubrimiento. El encubridor no es un partícipe; sólo lo son los autores y los cómplices; el encubridor viene después y comete un delito especial que debe ser

legislado como lo hace el proyecto. Si concurre antes de realizado el delito, ya no es encubridor, sinó autor o cómplice.

Un examen completo del proyecto de 1906, no puede ser hecho al presentar estos fundamentos. Baste decir que la exposición de motivos del mismo es bien amplia y que a ella pueden agregarse como antecedentes, el proyecto de 1891 con su exposición respectiva y las dos obras citadas del doctor Rodolfo Riva-rola.

He querido solamente señalar sus principales rasgos y precisar sus más benéficas innovaciones para provocar la curiosidad de su estudio y la rapidez de su sanción.

Examinarlo detenidamente equivale a aceptarlo y si tuviera defectos susceptibles de borrarse, sería cuestión de eliminarlos y obtener así la ley que reclama ya nuestra cultura creciente.

Conocido el proyecto de 1906, uno de nuestros eruditos en ciencia penal, el doctor Julio Herrera, ex-senador de la nación que brilló en el debate de la ley núm. 4189, oponiéndose a muchas de sus disposiciones, publicó un grueso volumen, titulado "La reforma penal", destinado a verificar un examen crítico de aquel proyecto.

Las observaciones más fundamentales de ese estudio demostrativo de las salientes condiciones del autor, se refieren a régimen penitenciario o sea a la forma de aplicación de las penas de encierro. Considero razonables y acertadas esas observaciones, pero creo que no constituyen la materia de un código penal, sino de una ley sobre establecimientos penales. Y como se encuentra uno de esos proyectos a la consideración de la honorable cámara de diputados, me propongo en su oportunidad recoger para darles forma práctica, muchas de las ideas del ex-senador por Catamarca.

*El proyecto de ley.* — Acepto en principio el proyecto de 1906, pero como resulta de los antecedentes expuestos, es indispensable completarlo teniendo en cuenta las leyes dictadas después de su presentación.

Además disiento en algunos puntos con el mismo y eso me impone proyectar algunas reformas que indicaré en el curso de estos fundamentos, tratando de ser lo más concreto posible.

#### *Modificaciones al proyecto de 1906.*—

a) *Faltas.* — El proyecto de 1906 legisla sobre delitos y faltas. Así lo dice el artículo 1o. La exposición de motivos expresa al respecto: "Hemos agregado también, con el mismo propósito de uniformar todas las leyes de carácter penal, un libro sobre faltas, siguiendo en esto a la mayoría de los códigos modernos, incluso el de Alemania, y el proyecto para la Suiza, cuyas instituciones federativas no han sido obstáculo para que la nación se ocupe de ellas como materia de legislación general".

"Sin embargo, si esta parte del proyecto, suscitara escrúpulos de orden constitucional y se pensara que invade el dominio de las autonomías provinciales, su eliminación en nada alteraría la economía del código. La comisión, tiene, no obstante la creencia de que esos escrúpulos no se han de manifestar, porque piensa que si el congreso tiene por la constitución, la facultad de dictar el código penal de la nación, en dicha facultad está forzosamente comprendida la autoridad necesaria para incluir en ese código todos los actos u omisiones que en cualquier parte del territorio de la nación se consideran ilícitos y merecedores de una pena. Las provincias conservarán siempre el poder de crear y reprimir faltas de carácter local, y como es este poder el único que constitucionalmente les corresponde en esta materia, es evidente que sus autonomías no sufren cercenamiento alguno porque el congreso legisle sobre faltas de carácter general."

La comisión, como puede verse, aún cuando ha proyectado un libro sobre faltas, y aún cuando entiende que debe incluirse en la ley de fondo, ha separado ese libro del resto para que pueda ser eliminado, en caso de tenerse dudas constitucionales que plantea, como consecuencia de diversas discusiones producidas al respecto.

Es evidente que las provincias en su carácter de estados federales se ven precisadas a dictar una serie de disposiciones que sólo a ellas interesan, puesto que derivan de necesidades locales, y es también indudable que precisan para darles eficacia establecer sanciones que aseguren el cumplimiento.

De aquí, que las provincias deban

dictar y dicten disposiciones penales para hechos que no siendo delitos, afectan el funcionamiento administrativo y político, como el orden y las buenas costumbres. Las provincias han legislado siempre sobre faltas pero en ninguna ley se ha definido el límite de su facultad impositiva. De manera que en rigor nada se opondría hoy, a que las provincias legislando sobre faltas, pudieran aplicar las penas que encontrasen conveniente sin ninguna restricción.

No creo oportuno fundar con extensión mi divergencia con el proyecto en cuanto se refiere a las faltas que creo materia de legislación local, porque esta exposición debe ser breve y porque he tratado el punto en "La ley penal argentina" y sería repetirme. Qui ro decir solamente que considero inoportuno que el congreso legisle sobre esta materia en primer lugar porque desde el momento que se reconoce en las provincias la facultad, tendríamos dos cuerpos de leyes sobre faltas: uno nacional y otro provincial, y en segundo porque las faltas son variables de lugar a lugar, se relacionan con el estado social, la densidad de la población, las costumbres, las circunstancias naturales, la edificación, los caminos, etc. y no resulta oportuno una legislación uniforme.

El ejemplo de Suiza con su extensión territorial tan reducida y el de Alemania con su uniformidad no se pueden aplicar a nosotros. El de Estados Unidos que podríamos tomar no nos puede suministrar antecedentes favorables, porque allí toda la legislación de fondo es regional y los códigos se dictan por los estados federales.

Encuentro en resumen, que debe suprimirse del proyecto el libro sobre faltas y colocarse un artículo nuevo fijando el máximo de imposición que puedan hacer las provincias.

b) *Pena de muerte.* — Autores, juristas, sociólogos, poetas, discuten la pena de muerte. Repetir argumentos sería hasta de mal gusto, porque ellos se encuentran en todos los tratados. Bastaría, si se quieren autores argentinos, mencionar a los doctores Rivarola y Herrera.

En el seno de la comisión que redactó el proyecto de 1906, las opiniones se dividieron en este punto, sosteniendo el

criterio abolicionista, el doctor Rodolfo Rivarola, que era en mi manera de ver el más eminente en esta materia de todos los miembros que la formaban.

Al doctor Rivarola acompañó el doctor Beazley, pero siendo adversa la mayoría se convino en dejar la pena, pero con tal número de restricciones, que su aplicación era prácticamente difícil.

La pena de muerte entre nosotros, ha sido un enunciado de la ley. Los tribunales la aplican poco, a pesar de que la reforma la prodigó y los poderes ejecutivos cuando se pronuncia, la conmutan no dando curso a las ejecuciones.

Mantenerla, es como antes decía, conservar un enunciado, que no tiene objeto, y que contraría el sentimiento nacional.

Por eso, concordante con lo que he sostenido en diversas publicaciones, elimino del proyecto los artículos que la instituyen y reglamentan su aplicación y modifíco, suprimiendo las palabras necesarias, los artículos que la mencionan.

Las últimas ejecuciones producidas en la capital, que son las primeras que han tenido lugar en la república después de veinte años, no proporcionan un argumento. Bastaría leer los juicios de nuestra prensa que con verdadera unanimidad se ha pronunciado en contra de la justicia salvaje que reprime el crimen, contrario a la ley con otro crimen que ella crea y hace ejecutar.

Esperemos que esas condenas demostrativas de la existencia de una pena olvidada sean las últimas y sirvan en este momento para recordar el anacronismo del código.

c) *Pérdida de jubilaciones y pensiones.* — El proyecto quita a los penados esos beneficios, lo que es justo sin duda alguna. Pero, cuando el condenado tiene esposa o hijos menores, no es acertado imponer a esas personas, a más del dolor moral por el acto ajeno, el sufrimiento material que implica la pérdida del recurso. Dejo en consecuencia en estos casos, la mitad de la pensión, jubilación o goce de montepío, a esas personas. Al referirme a hijos, digo de cualquier clase, porque el mismo derecho a la vida tienen los legítimos que los ilegítimos.

d) *Pena de homicidio.* — Para dar

mayor amplitud a los jueces y teniendo en cuenta los resultados de la ley núm. 4189, considero preferible fijar en ocho y no en diez años el mínimum de la pena del homicidio simple.

e) *Pena del disparo de arma.* — El proyecto la fija en seis meses a dos años de prisión. El código en uno a tres años de la misma pena.

Considero conveniente mantener la penalidad del código, dada la gravedad de ese delito y teniendo en cuenta la dificultad para distinguir en el hecho entre tentativa de homicidio con arma de fuego y disparo de arma.

Generalmente depende del propio sujeto que declara la calificación desde que se trata de exteriorizar un estado de conciencia y como pocos son los que manifiestan una intención que los perjudicaría, casi siempre los actos que importan en el fondo una tentativa, se reducen a un delito menor.

Entiendo por ello, que la pena de la ley actual no es exagerada y que no conviene disminuirla restando importancia a un hecho tan grave como el de disparar un arma de fuego contra una persona.

f) *Agresión.* — El proyecto, lo mismo que la ley vigente, castigan, en primer término el disparo de arma contra una persona sin hierirla y en seguida la agresión “con otra clase de arma”. Esto ha permitido a los jueces considerar que la agresión con arma de fuego carece de penalidad.

La agresión con un rebenque, con un cuchillo, con un palo, se castiga; la misma con un revólver, no.

Me hago cargo por eso, de la deficiencia y la subsano cambiando las palabras “otra clase de arma” por la palabra “toda” que comprende cualquier arma.

g) *Adulterio.* — El proyecto introduce en esta materia innovaciones de detalle, haciéndose cargo de las críticas que se formularon oportunamente contra el código vigente.

Suprime la pena de destierro que constituía un anacronismo y reduce el castigo de prisión impuesto por la ley vigente.

Si hubieran de triunfar mis opiniones personales, suprimiría ese capítulo de la ley represiva, por razones que he

vertido en publicaciones anteriores. Pero pienso, en esta como en otras materias, que cuando se trata de legislar para un país, no puede pensarse en imponer las propias creencias, sino en recoger del ambiente de la colectividad lo que se piensa y desea. El legislador puede mejorar, pero jamás inventar fuera del sentimiento y la necesidad del pueblo para el cual se proyecta.

Por eso, sin declinar de convicciones científicas ni doctrinarias, debo, si pretendo hacer obra útil, no chocar con el medio y aceptar las imposiciones del mayor número. Vierto esos conceptos para explicar porqué no suprimo ni modifico algunas partes del proyecto, el que ha sido redactado, como lo dijo la exposición de motivos y lo remarcó el doctor Magnasco en el prólogo del libro del doctor Herrera, de acuerdo con la experiencia y sin hacer “ensayos de teorías más o menos seductoras”.

La ley núm. 4189 por el artículo 18 modificó el 126 del código penal, prohibiendo la acción mientras no se obtuviese sentencia de divorcio.

El proyecto repite ese precepto, pero no en la parte especial sino en el artículo 78 de la general y en el título destinado al ejercicio de las acciones.

De manera que reduce las penas, suprime el anacronismo del destierro y mantiene la cláusula restrictiva que se encontraba ya en el proyecto de 1891.

h) *Estado civil.* — Hay casos en que se supone el estado civil de una persona para beneficiarla sin perjudicar a nadie. Eso sucede muchas veces cuando se adoptan expósitos y no se tienen herederos. Como entre nosotros no existe la adopción, se recurre algunas veces al expediente de simular la existencia del hijo.

Los términos generales del artículo 143 del proyecto podrían llevar a que se castigase a quien no hubiera tenido el propósito de delinquir, no obstante lo que se establece respecto a voluntad criminal. He creído conveniente por eso, referirme al propósito para que no puedan producirse interpretaciones dudosas.

i) *Incendios.* — Concordante con lo expresado respecto al homicidio, encuentro que el mínimum de la pena establecida en el inciso 4o. del artículo

203, debe ser ocho y no diez. No aplico ese mismo criterio en el caso del artículo 180 porque el robo es siempre una agravante especialísima.

*La ley número 9143.* — A iniciativa del ex-diputado doctor Alfredo L. Palacios, se sancionó esta ley, que tuvo por objeto reprimir la trata de blancas, combatiendo una verdadera lacra social.

El código vigente era sin duda alguna deficientísimo en esta materia. Se ocupaba en el título III del libro segundo de los delitos contra la honestidad tratando en cinco capítulos, del adulterio, de la violación, del estupro y corrupción de menores, del rapto y de disposiciones comunes. En este último se contenían reglas relativas al ejercicio de acciones, a obligaciones civiles y a la situación de ciertas personas en esa clase de delitos.

Con respecto a corrupción de menores traía sólo el artículo 132 por el cual se incriminaba al que habitualmente o con abuso de autoridad o confianza, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores. La pena se graduaba de acuerdo con la edad de la menor.

La ley número 4189, siguiendo al proyecto de 1891 reemplazó esas disposiciones con los incisos g) y h) del artículo 19, los que introdujeron sobre el código varias novedades.

En primer lugar se quitó el término "habitualmente", castigando en todos los casos la prostitución o corrupción de menores; en segundo estableció la deportación para el caso de reincidencia; en tercero se refirió al menor sin distinción del sexo; y por último fijó la línea de distinción en los doce años y no en los catorce.

Los preceptos de la ley importaban un progreso sobre el código, pero las penas no tenían la severidad necesaria ante el incremento de ese grave delito, ni las previsiones se extendían a todos los casos.

La ley 9143 vino así en principio a llenar una necesidad, debiendo sin embargo observarse, que siendo complementaria del código penal, contiene preceptos ajenos a esta ley y algunas contradicciones entre sus artículos que han ocasionado dificultades prácticas.

Para llegar a la unidad perseguida conviene la derogación de esa ley y la incorporación al proyecto de 1906 de las disposiciones que encierran previsiones necesarias. Esto además del aumento de la penalidad, ya consagrado por el congreso cuando dió su voto a la llamada ley Palacios.

Para ser metódico empezaré por examinar tal ley y sus previsiones.

El artículo 10. de la misma modifica los incisos g) y h) del artículo 19 de la ley núm. 4189 de reformas al código penal aumentando los castigos establecidos en esta última para los que promovieren o facilitaren la prostitución o corrupción de menores. Tiene en cuenta para graduar las penas la edad de las víctimas menores, y agrega un párrafo destinado a incriminar a los que facilitaren o promovieren la prostitución o corrupción de mayores de edad.

En el inciso h) establece una presunción para los regentes de casas de prostitución que ya se encontraba consignada en el proyecto de 1906 y establece también la deportación del reincidente, en los artículos 2 y 3.

Castiga igualmente en los artículos 2 y 3 a los regentes de prostíbulos que admitan menores en sus establecimientos y a los que se ocupen de ese tráfico sin estar autorizados.

El artículo 40. se refiere a la admisión de extranjeros, precepto que no es propio del código penal; el 50. al ejercicio de las acciones; el 60. contiene un precepto procesal innecesario porque los códigos de forma lo contienen y la obligación que impone es de la esencia de las autoridades a que se refiere; el 70. es también un artículo de procedimientos; el 80. se refiere al encubrimiento, y el 10 contiene una sanción para los regentes de casas de prostitución autorizadas que no mantengan en lugar visible de su establecimiento, un ejemplar de la ley.

Recordados los preceptos de la ley núm. 9143, conviene compararla con el proyecto de 1906 a los efectos de las modificaciones que convenga introducir.

La ley núm. 9143 castiga a los que promovieren o facilitaren la prostitución o corrupción de menores de edad:

a) con 3 a 6 años de penitenciaría

si la víctima es mujer mayor de 18 años, pero menor de edad;

b) con 6 a 10 años de la misma pena si la víctima, varón o mujer, es mayor de 12 años y menor de 18;

c) hasta 15 años si la víctima es menor de 12 años.

El proyecto de 1906 castiga el mismo delito con la pena de seis meses a cuatro años de prisión si la víctima fuere persona menor de 18 años.

Cuando la víctima es mayor, reprime al delincuente con la misma pena, si medió fraude, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otra coacción.

La ley núm. 4189 aplica cuando la víctima es mayor de edad, penas que varían entre 6 y 10 años y 1 a 3 años de penitenciaría, según los casos.

El criterio de la ley y el del proyecto es el mismo; lo que varía es la penalidad, que es mayor en la ley.

La presunción del inciso h) de esta última se encuentra en el artículo 129 del proyecto, de donde seguramente se ha tomado el precepto.

El artículo 20. de la ley núm. 9143 rige puntos ya tratados en los artículos 10. inciso h) y 30., y este último tiene su equivalente en el 131 del proyecto.

El proyecto tiene además el artículo 132 que castiga al que luera con la prostitución de una mujer, no siendo regente de casa autorizada, precepto necesario que no se contiene en la ley Palacios.

Lo expuesto basta para explicar mi artículo 30., pues tengo en cuenta las disposiciones de fondo de la ley número 9143 para modificar el proyecto. Esa ley, en consecuencia, quedaría derogada.

Para proyectar los preceptos que coloco en substitución a los del proyecto de 1906, he tenido en cuenta las penas que aquél establece en todos los delitos contra la honestidad, evitando desarmonías. He aceptado el criterio de la ley núm. 9143, que se refiere a la corrupción de menores de edad y no menores de 18 años, y he tenido en cuenta para fijar las represiones las distintas escalas de edades que también determina aquella ley.

Teniendo en cuenta las penalidades establecidas en tal ley y las que fija la núm. 4189 para los delitos de violación y estupro, he creído conveniente modificar las del proyecto de 1906, que son menores a las vigentes.

He tomado además todas las previsiones de carácter penal contenidas en la ley núm. 9143 y he adaptado el proyecto de 1906 a las mismas, colocando en el que presento los artículos 40., 50., 60., 70. y 80. que se ajustan al criterio expuesto.

*La ley número 7029.*—La llamada ley de seguridad social fué, poco tiempo después de promulgada, objeto de un estudio que publiqué en la Revista argentina de ciencias políticas y posteriormente en un folleto.

No repetiré por tanto en estos fundamentos la crítica allí vertida, porque no sería oportuno volver sobre lo mismo y alargar demasiado esta exposición de motivos.

Baste recordar, para estar dentro del asunto, que la ley número 7029 es una ley represiva que modifica los preceptos del código penal y que debe ser tenida en cuenta al proyectar la unidad en esa materia. Pero esta ley no contiene solamente un conjunto de preceptos represivos, porque se ocupa de diversos asuntos que forman la materia de leyes diferentes.

Desde luego, creo que la mejor manera de llevar el desorden a la legislación, es en una ley aislada, tocar varias, modificar parcialmente diferentes conjuntos y no establecer la concordancia, indicando en concreto lo que se deroga. Es, por otra parte, éste un defecto general, pues en lugar de decirse cuando se dicta una ley nueva, el precepto o los preceptos de otra u otras que se abrogan, se recurre al socorrido sistema de declarar derogado todo lo que se opusiere al nuevo cuerno.

La ley número 7029 incurre en el defecto común, y eso que arremete contra la constitución y modifica el código penal, la ley núm. 4189, la ley federal de 1863, la ley de ciudadanía, la de inmigración, la de residencia y el código de procedimientos.

El capítulo 30. que es el relacionado con la materia represiva, es el que debe ser objeto de nuestro examen.

Comprende la apología del crimen, el uso y estallido de explosivos, el homicidio, las lesiones y los estragos cometidos por medio de explosión, ciertas asociaciones criminales, la incitación y la propaganda en determinadas condiciones, los delitos de imprenta y otros atentados.

Para demostrar que el proyecto de 1906 contiene la casi totalidad de las previsiones de la ley núm. 7029, bastará verificar un ligero examen en cada punto.

a) *Apología del crimen.* — El artículo 12 de la ley núm. 7029, de acuerdo con la última parte del artículo 60. de la ley italiana núm. 314 de julio de 1894, castiga con pena de prisión desde uno a tres años, al que hiciere públicamente la apología de un hecho o del autor de un hecho que la ley prevé como delito. Incrimina así el elogio verificado respecto al acto delictuoso.

El proyecto de 1906 en el título VIII destinado a reprimir los delitos contra el orden público, no contiene esa previsión, de manera que debe agregarse como lo hago por el artículo 90. de mi proyecto. La penalidad de la ley núm. 7029 es elevada y conviene reducir el *minimum* dando márgenes amplios para que no pueda castigarse con más pena, como podría ocurrir, al que elogia el delito, que a quien lo cometió.

b) *Explosivos y explosiones.* — Los artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley número 7029, se ocupan de la fabricación, transporte y guarda de explosivos, lo mismo que del estallido de aquéllos. Las penas son diversas, según los casos y las consecuencias.

Los casos a los cuales se refieren los artículos 13, 14, 15 y 16 de dicha ley se encuentran comprendidos en los artículos 203, 204, 205, 226, 84 inciso 2o. y 96 del proyecto, teniendo este último a su favor la mejor redacción y el mejor orden. Comprende además los casos de imprudencia en el artículo 206, los que fueron omitidos en la ley.

La mayor parte de los mismos se encontraban previstos y castigados en el código penal vigente, pero la ley, que no tuvo más antecedentes en la

parte represiva, que el estatuto italiano antes citado, olvidó las previsiones del código y de la reforma para repetir en unos casos, contrariar en otros e introducir la confusión siempre.

Omito mayores comentarios porque los he vertido en el folleto "La seguridad social", antes mencionado.

El proyecto tiene, al ocuparse de estas materias, una pequeña omisión con respecto a la ley núm. 7029, pues no incrimina al que fabrica explosivos sin estar autorizado o divulga los conocimientos necesarios para su fabricación. Como estos puntos han sido tocados por aquella ley, y aun por el código penal, que alterando los principios generales de la tentativa, trae el artículo 213 destinado a esa represión especial, considero conveniente introducir un nuevo artículo, como lo hago con el 10o. de mi proyecto.

c) *Incitación al delito.* — La ley número 7029 castiga en los artículos 20 y 21 la incitación al delito.

El proyecto de 1906 ofrece, con redacción superior y previsiones más acertadas, los artículos 226 y 227.

d) *Incitación por la prensa.* — El artículo 23 de la ley núm. 7029 nació muerto, pues como lo observó el señor Láinez en el senado, contrariaba el artículo 32 de la constitución, dado que la ley atribuía la competencia en toda su materia a los tribunales federales.

La incitación por la prensa debe ser regida por las disposiciones comunes, como resulta del proyecto de 1906.

e) *Asociaciones ilícitas.* — El proyecto las castiga en los artículos 228 y 229, de manera que contiene las previsiones que han querido llenarse con la ley núm. 7029.

f) *Ventas, impresión y distribución de impresos.* — Las disposiciones que ofrece en esta materia la ley número 7029 son insostenibles y no pueden repetirse en ningún código serio.

Basta la lectura de los artículos 12, 19, 20, 21 y 22, observados por mi parte en la publicación recordada, para formar un criterio.

Ellos han modificado para casos especiales el artículo 40. inciso d) de la ley núm. 4189 tomado del proyecto de 1891 y contenido en el de 1906, por

razones concluyentes que ha puesto de manifiesto el Dr. Rivarola, y la exposición de motivos del citado proyecto de 1891.

Entiendo por eso que no debe insistirse en esas disposiciones que son, además de repugnantes al buen criterio jurídico, inaplicables.

g) *Delitos contra la libertad de trabajo.* — El artículo 25 de la ley número 7029 castiga esos delitos como una novedad, sin tener en cuenta que la ley número 4189 de reformas al código vigente se ocupaba de incriminarlos.

El proyecto de 1906 contiene en esa materia el artículo 165 que es bien preciso. En el capítulo IV del título V, donde se contiene ese artículo, legisla el mismo sobre delitos contra la libertad del trabajo e industria, ocupándose de reprimir a los que ejercen violencias o amenazas sobre otro para compelerlo a una huelga, de los que restringen o impiden a otro el ejercicio de su industria o comercio y de los que verifican propagandas desleales con relación a un establecimiento comercial o industrial.

h) *Desconocimiento de la constitución nacional.* — El artículo 26 de la ley 7029 castiga ese delito, el que existe cuando se comete un acto de rebelión como lo establece el proyecto de manera más amplia y precisa en el artículo 244. Este incrimina también en el inciso 1.º del artículo 248, el desconocimiento de la constitución de una provincia.

La última parte del contenido del artículo 26 de la ley núm. 7029, no tiene equivalente en el proyecto, y creo conveniente su inclusión en el código colocando un nuevo precepto.

Las ofensas al escudo y a la bandera, que son símbolos aceptados por todos los ciudadanos, se sienten generalmente como ofensas personales y dan lugar, sino se castigan a incidencias más lamentables que las de la represión.

Previstos los diferentes casos que incrimina la ley núm. 7029, y completado el proyecto con las previsiones de aquella que faltaban en éste, la subsistencia de esa ley no tiene objeto.

Crear una legislación excepcional que contiene enunciados más que pre-

ceptos prácticos, no es ni conveniente ni serio.

La ley 7029 comprende disposiciones insostenibles y desarmónicas con nuestros precedentes, con nuestras prácticas y con todos los demás conjuntos articulados. Debe suprimirse de nuestra legislación por cultura jurídica, social y científica.

Tiene preceptos sobre jurisdicción que alteran la ley fundamental y que han sido declarados inconstitucionales e inaplicables por los tribunales. Fija un término imposible para los procedimientos, el que ha resultado ilusorio porque los tribunales de todas partes han declarado que los juicios provenientes de delitos castigados por la llamada ley de seguridad social, deben tramitarse de acuerdo con el procedimiento ordinario. Cambia el criterio de las leyes vigentes y sólo para ciertos delitos, en materia de complicidad y de encubrimiento, y encierra en fin un conjunto desordenado, contradictorio con las otras leyes penales e ineficaz en muchos casos por ser preceptos inaplicables como lo han demostrado los tribunales.

Pero la derogación, lisa y llana de la ley núm. 7029, no ha prosperado en el congreso, a pesar de lo desacertado de sus disposiciones, probablemente porque sólo se proponía destruirla y no reemplazarla. Es por eso, que conociendo ese criterio, coloco las cosas en un terreno que supongo acertado, proponiéndome unificar, haciendo cesar el desorden y derogando sin derogar, puesto que suprimo lo insostenible y conservo en la ley penal las previsiones acertadas, que son por cierto pocas.

Los preceptos de la ley núm. 7029 relacionados con inmigración y ciudadanía no convienen en la forma producida. Será más acertado en su oportunidad, reformar esas dos leyes en puntos diversos, en que son sin duda incompletas y entonces tener en cuenta lo que trae al respecto la ley de seguridad.

En mi sentir la reforma, más bien la modernización de esas dos materias: inmigración y ciudadanía jurídicamente considerados, es indispensable y



deberá ser afrontada a la posible brevedad.

*La ley número 4114*.—La ley número 4114, conocida con el nombre de ley de residencia, es en realidad una ley penal. Mi opinión sobre la misma ha sido categóricamente manifestada en diversas oportunidades y, por consiguiente, no es el caso de repetir argumentos. Baste recordar que he sostenido la inconstitucionalidad de la misma, encontrando que contraría preceptos expuestos de la carta fundamental.

La expulsión de extranjeros, como la falta de admisión de los mismos, es, sin embargo, un derecho emanado de la soberanía.

En mi sentir, lo que debe hacerse es reglamentar la expulsión con otro criterio, distinguiendo entre casos y casos y quitando la facultad al poder ejecutivo que la usurpa en rigor al poder judicial.

Intencionalmente no he tocado el punto en este proyecto, porque la expulsión de extranjeros es, en todas partes, motivo de una ley especial, y me propongo en oportunidad presentarlas ofreciendo no sólo la derogación de la ley núm. 4114, sino el reemplazo de la misma.

La derogación sola, dicen los que la defienden, nos dejaría desarmados frente al elemento que debemos excluir, y como ese es un argumento que ha decidido, deseo eliminarlo con la presentación de un proyecto, que permita el uso del arma, pero dentro de los límites prescritos por la constitución, que es la ley de las leyes.

*La ley número 9077*.—El código penal no contenía precepto alguno que castigase al que libra un cheque sin tener depósito en el banco contra el cual gira.

Para evitar las estafas realizadas con ese ardid, el señor diputado Delfor del Valle presentó un proyecto, que fué sancionado y que tiene como ley el núm. 9077.

Se agrega en virtud del mismo un nuevo inciso, el núm. 15, al artículo 203 del código penal, en el cual se establece que quedan comprendidos en sus disposiciones los que dieren en pago cheques sin tener provisión de fondos

o autorización para girar en descubier-to, siempre que dentro de las 24 horas del protesto no abonaren su importe.

La ley no produjo los resultados esperados, porque los tribunales entendieron que incriminaba a los que cometían defraudación por medio de cheques y no a los que giraban un cheque sin depósito. La defraudación por medio de cheque estaba por lo demás prevista por el precepto general del artículo 202 del código vigente.

Fué debido a esos resultados que el mismo autor de la ley, señor Del Valle, presentó a la cámara, con fecha 20 de agosto de 1913, un proyecto nuevo, que se encuentra en la página 952 del tomo 2o. del diario de sesiones de aquel año. El proyecto comprendía todas las previsiones y fué fundado de manera erudita por su autor.

Aprovecho esas previsiones para incorporarlas al código, completándolo bajo todos sus aspectos.

El art. 2o. del proyecto Del Valle, ya que el 1o. es innecesario, dado lo establecido por el proyecto de 1906 en materia de defraudaciones, lo agrego en un capítulo final del título de los delitos contra la fe pública. Modifico lo de notificación, requiriendo el protesto, pues la primera podría ser difícil cuando el deudor se oculta y prestarse a múltiples abusos por parte de éste. Lo relaciono además con lo establecido en el título sobre defraudaciones.

El artículo 3o. del citado proyecto Del Valle lo incorporo al 191 del proyecto de 1906, donde entiendo tiene su verdadera colocación.

Los fundamentos del mismo lo ha dado el diputado autor en los términos siguientes: "el artículo 3o. tiende "a prevenir los abusos que al amparo de las penalidades de la ley venían "cometiendo los que se dedican al comercio indigno de la usura".

"Al prestar dinero a sus apurados "clientes, en vez de un documento de "reconocimiento de la deuda, exigían "el cheque, porque así adquirirían un "instrumento de doble eficacia contra "su deudor: la acción ejecutiva y la "extorsión que producía el proceso "criminal, desde que había firmado un

“cheque sabiendo que no tenía provisión de fondos”.

He colocado para ese caso la pena de multa y no la de prisión, dada la naturaleza del delito, la gente que lo comete y el propósito de la penalidad.

*Conclusiones.* — Resumiendo: acepto como base para la reforma penal el proyecto de 1906 que la unifica, con las modificaciones que concreto a continuación:

1a. Supresión del libro sobre “faltas” y de las palabras que al mismo se refieren en los artículos del proyecto que las contienen;

2a. Supresión de la pena de muerte, eliminando los preceptos que la consagran y substituyendo esa pena por otra en los casos en que se impone;

3a. Mantenimiento de la mitad de las pensiones de ciertos condenados cuando tuvieren familia y a beneficio de ésta;

4a. Disminución del minimum en la penalidad del homicidio para dar mayor margen a los jueces;

5a. Mantenimiento de la pena actual en el delito de disparo de arma de fuego;

6a. Penalidad de la agresión con toda arma, y no solamente con arma blanca;

7a. Limitación de la pena en los casos de alteración de estado civil, la que deberá aplicarse solamente cuando hubo el propósito de causar un perjuicio;

8a. Aumento de la penalidad en los delitos contra la honestidad para concordarlos con el criterio de las leyes vigentes;

9a. Derogación de la ley número 9143, que reprime la trata de blancas e incorporación al código de los preceptos que encierran previsiones no contenidas en aquél, a los efectos de la unificación y concordancia;

10. Derogación de la ley número 7029, llamada de seguridad social e incorporación al código, a los efectos indicados, de los hechos que aquélla incrimina y omite el proyecto;

11. Derogación de la ley número 9077 sobre cheques dolosos e incorporación en su lugar respectivo de dos preceptos del proyecto sobre el mismo asunto del señor diputado Delfor del Valle;

12. Derogación de las leyes anteriores, tanto federales como ordinarias sobre materia represiva.

Tal es el proyecto.

Nadie discute que llena una necesidad y tiende a concluir con la anarquía reinante en esta materia.

Espero que la honorable cámara le preste su atención y sancione lo más acertado dentro de lo posible.

—Pasa el proyecto a la comisión de códigos.

## 22

### REGIMEN DE SOCIEDADES Y EMPRESAS EXTRANJERAS QUE EXPLOTAN SERVICIOS PUBLICOS.

#### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1.º — Las sociedades y empresas que exploten servicios públicos en la República Argentina, y que tuvieran su asiento o directorio principal fuera del país, estarán obligadas a entregar al poder ejecutivo de la nación, a los gobiernos provinciales y municipalidades de las zonas en que funcionan, en español e impresos a su costo, las memorias, balances y demás documentos que presenten a sus asambleas de accionistas en cualquier otro idioma.

Art. 2.º — La presentación a que se refiere el artículo anterior deberá ser hecha dentro de los tres meses posteriores a la reunión de cada asamblea de accionistas.

Art. 3.º — Dichas sociedades y empresas deberán autorizar a sus directorios locales o gerentes en la República Argentina para entender en todo lo referente a las cuestiones que puedan surgir, entre ellas y sus obreros y empleados, con motivo de su trabajo.

Art. 4.º — En esos casos, y si no se arreglaran de mutuo acuerdo, esas sociedades o empresas estarán obligadas a aceptar el árbitro que, para dirimir la reclamación o el conflicto, designe eventualmente el poder ejecutivo de la nación.

Art. 5.º — El poder ejecutivo dispondrá, al reglamentar esta ley, la forma en que debe darse cumplimiento a las disposiciones anteriores y a la intervención que, a los fines de lo prescripto por los artículos 1 y 2, deberían tener los representantes diplomáticos o cónsules de la república en el extranjero.

Art. 6o. — Comuníquese al poder ejecutivo.

*Antonio de Tomaso — Antonio Zaccagnini — Francisco Cúneo — Enrique Dickmann — Angel M. Giménez — Juan B. Justo — Augusto Bunge — Mario Bravo.*